



NUE 254-A-2019 (YC)

contra Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del seis de abril de dos mil veintiuno.

1. Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] bajo la representación de los licenciados [REDACTED] en adelante la parte apelante, en contra de la resolución emitida por el Oficial de Información del **Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)**, respecto de la siguiente información:

- 1 "Proporcione el manual de la Guardia Nacional de 1974;
- 2 **Información sobre la Policía Nacional relativa a:** a) proporcione los documentos de nombramiento (orden general de nombramiento) y remoción (orden general de baja) de la máxima jefatura de la Policía Nacional, además solicitamos el nombre completo y rango de la persona directora de la Policía Nacional en mayo de 1982; b) Proporcione quien (nombre, apellido y rango) estaba destinado al mando de las operaciones de seguridad pública circunscritas al municipio de Ayutuxtepeque y Mejicanos, por parte de la Policía Nacional en mayo de 1982; c) Informe diario de situación (IDS) sobre las detenciones ocurridas a partir del 15 de mayo hasta el mes de septiembre de 1982 en el Municipio de Ayutuxtepeque y Mejicanos que llevó la Policía Nacional; d) (...) manual de procedimientos ordinarios diarios sobre detenciones y turnos en mayo de 1982 que llevó la Policía Nacional o el plan operativo normal vigente en 1982 relativo a la detención de personas; e) (...) copia del registro del libro de detenciones que llevó la Policía Nacional en el cuartel central en mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1982, identificando si existen registros de las personas siguientes: [REDACTED] f) (...) documentos de resumen de inteligencia nacional por la Policía Nacional en San Salvador llevados



en mayo de 1982 y el plan de seguridad interior o plan militar anual vigente a la fecha; y g) (...) informes periódico personal que remitió la Policía Nacional entre el 17 y el 25 de mayo de 1982 en ayutuxtepeque y Mejicanos; y,

3. *Información sobre la Fuerza Armada relativa a:* a) (...) documentos de nombramiento (orden general de nombramiento) y remoción (orden general de baja) de la máxima jefatura, alto mando, comandante de la fuerza armada, además solicitamos nombre completo y rango de la máxima jefatura de la fuerza armada en mayo de 1982; b) proporcione quien: (nombre, apellido y rango) estaba destinado al mando de las operaciones de seguridad pública circunscritas al municipio de Ayutuxtepeque y Mejicanos por parte de la Fuerza Armada el 17 de mayo de 1982; c) Informe diario de situación (IDS) sobre las detenciones ocurridas a partir del 15 de mayo hasta septiembre de 1982 en el municipio de Ayutuxtepeque y Mejicanos, que llevó la fuerza armada; d) (...) manual de procedimientos ordinarios diarios sobre detenciones y turnos en 1982 que llevó la fuerza armada o el plan operativo normal vigente en 1982 relativo a la detención de personas; e) (...) copia del registro del libro de detenciones que llevó la fuerza armada, en el cuartel central en mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1982, identificando si existen registros de las personas siguientes: [REDACTED]

[REDACTED] f) (...) documentos de resumen de inteligencia nacional por la Fuerza Armada en San Salvador llevados en mayo de 1982 y el plan de seguridad interior o plan militar anual vigente a la fecha; y g) solicitamos informe periódico personal que remitió la Fuerza Armada entre el 17 y el 25 de mayo de 1982 en Ayutuxtepeque y Mejicanos."

El Oficial de Información del MDN resolvió: "1. Infórmese del contenido de la presente resolución al señor [REDACTED] 2. Confírmese la inexistencia de la documentación de las pretensiones incoadas por el señor [REDACTED] en este procedimiento de acceso a la información pública ... "

Durante la etapa de instrucción, el MDN no rindió el informe bajo los términos del artículo 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Es importante manifestar que en auto de admisión de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, se designó al Comisionado Alirio Cornejo para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución del caso; sin embargo, la anterior designación sufrió una serie de

modificaciones, las cuales concluyeron en la reasignación del caso a la Comisionada en Suplente **Yanira del Carmen Cortéz**.

En cuanto a la realización de la audiencia oral, en primer lugar es oportuno expresar que se encontraba señalada para su realización en fecha 15 de abril de 2020, sin embargo mediante auto de fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, se reprogramó la misma, atendiendo al cumplimiento de las medidas legislativas emitidas en el contexto de la emergencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19, las cuales afectaron los plazos administrativos y por tanto, la tramitación de los procedimientos en curso, en tal sentido, la misma quedó señalada para el día 24 de junio de 2020.

Habiéndose llegado la fecha señalada, se llevó a cabo la referida audiencia, sin embargo, tal como consta en la respectiva acta suscrita a las nueve horas del día veinticuatro de junio de dos mil veinte, haciendo uso de las disposiciones normativas vigentes el apoderado del ente obligado planteó incidente, a través del cual solicitó la suspensión del procedimiento, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por un plazo de cuarenta (40) días hábiles, a efecto de realizar nueva búsqueda de la información requerida por la señora [REDACTED] valorando que el MDN contaba con limitantes de reducción de personal por motivo de Pandemia. Lo anterior, actuando bajo el principio de buena fe, en aras de lograr un avenimiento entre las partes y habiendo mostrado su beneplácito la parte apelante, reiteró su voluntad de remitir al ente obligado parámetros adicionales para la búsqueda de la información solicitada, siendo tales parámetros los contenidos en las copias en los escritos mediante los cuales se planteó habeas corpus y denuncia ante la Fiscalía General de la República, por contenerse en ellos el relato de los hechos correspondiente a la desaparición forzada de su grupo familiar. Como punto final, mediante la referida acta se indica a la parte apelante la necesidad de manifestar de manera oportuna sobre la recepción de la información en el momento en que esta sea presentada por el ente obligado, lo anterior como muestra de la vigilancia que este Instituto tendría sobre el cumplimiento de lo acordado entre las partes y con el propósito de garantizar la conformidad de la apelante con la información recibida.

En virtud de lo anterior, el día 26 de agosto de 2020, en Licenciado [REDACTED] [REDACTED] remitió documentación acreditado su participación en el presente



procedimiento en sustitución del Licenciado Carlos Edgardo Salgado Herrarte, quien representaba al Ministerio de la Defensa Nacional, ratificando todo lo actuado por el citado profesional; aunado a ello, el representante del ente obligado solicitó cinco días hábiles adicionales manifestando que desde el día 24 de agosto de 2020, el MDN contaba con mayor personal para realizar la búsqueda de la información solicitada en este procedimiento. En la misma fecha 26 de agosto, por otra parte, el apoderado de la señora [REDACTED] remitió un correo mostrando su inconformidad por el incumplimiento de parte del MDN, habiéndose agotado el plazo de 40 días hábiles, sin la entrega de la información. De igual manera, manifestó que se brindó parámetros de búsqueda suficientes para facilitar la localización de lo requerido. En tal sentido, por medio de auto pronunciado el día dos de octubre del presente año, habiendo transcurrido mayor tiempo del solicitado por la representación del ente obligado, este Instituto señaló la correspondiente audiencia oral cuya realización se llevaría a cabo en fecha 8 de octubre del 2020, advirtiendo que el referido señalamiento de audiencia no inhibe al ente obligado de realizar la entrega de la información de manera previa en caso de poder hacerlo.

El día 7 de octubre de 2020, en el marco previo a la realización de la audiencia oral, se remitió por parte del MDN, vía electrónica constancia médica suscrita por el Doctor Germán Reynaldo Arévalo Rosales, en la que se dejaba constancia de la incapacidad del Licenciado [REDACTED] para asistir a la realización de sus labores en el período comprendido entre el 7 y el 9 de octubre de 2020, viéndose imposibilitado para comparecer en la audiencia, en ese sentido, mediante auto de fecha 8 de octubre se dejó sin efecto el señalamiento de audiencia programada para ese mismo día, adicionalmente se reprogramó la audiencia para el día 15 de octubre de 2020.

Llegado el día designado para la realización de la audiencia oral, el apoderado del Ministerio de la Defensa Nacional remitió escrito mediante el cual informaba—en lo sustancial—sobre el incidente de recusación interpuesto ante la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ello respecto al Pleno de Comisionados/as de este Instituto conformado en ese momento por Ricardo José Gómez Guerrero, Andrés Grégori Rodríguez, Luis Javier Suárez Magaña, Claudia Liduvina Escobar y Gerardo José Guerrero Larín, debiéndose está al comunicado pronunciado por unanimidad por el Pleno de Comisionados en fecha 5 de octubre de 2020, hecho de conocimiento público mediante un tuit desde la cuenta oficial

del IAIP. Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la LPA, relacionado con el art. 94 de la misma ley, se dejó sin efecto el señalamiento de audiencia oral programada para las nueve horas del día 15 de octubre de 2020 y se suspendió la tramitación del procedimiento hasta contar con la respectiva resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo respecto del incidente de recusación referencia 2-20-RC-SCA.

En cuanto a lo anterior, en fecha 21 de octubre de 2020, la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo emitió Resolución respecto al incidente de recusación Ref. 2-20-RC-SCA en la cual declaró sin lugar el incidente planteado, manifestando entre otras cosas que los casos 252-A-2019 y 254-A-2019 no versan sobre la misma o similar información; adicionalmente, el Tribunal advierte que *"(...) el hecho que dichos funcionarios hayan conocido casos similares o de la misma naturaleza, no es causal por la que debe de inhibirse o separarse del conocimiento. Lo anterior se puede reforzar porque tanto en sede administrativa como jurisdiccional, se pueden presentar casos afines, pero eso no significaría la separación de los funcionarios por el hecho que ya se adelantó criterio, debido a que todas las decisiones se han tomado en el desempeño de las competencias y atribuciones en el ejercicio de sus cargos"*.

Luego de recibida la notificación de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante auto de fecha 6 de noviembre de 2020 este Instituto manifestó haber recibido la misma en fecha 5 del mismo mes y año, razón por la cual el Instituto se encontró habilitado para reanudar la tramitación del procedimiento, en tal sentido, se señaló audiencia oral a realizarse el día 2 noviembre de 2020. Al respecto, el día 9 de noviembre de 2020, el Licenciado [REDACTED] representante del ente obligado, presentó escrito y documentación anexa por medio de la cual solicitaba a este Instituto la reprogramación de la audiencia oral señalada para la fecha 12 del mismo mes y año, ello en virtud de tener programada para esa fecha con notificación previa, audiencia probatoria por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, la cual se había habilitado hasta el día siguiente en virtud de la complejidad de dicha audiencia. Con ello, este Instituto resolvió mediante auto de fecha diez de noviembre de dos mil veinte reprogramar la audiencia oral, en ese orden, la misma quedó señalada para el día **miércoles 18 de noviembre de 2020**.

Fecha en la cual, se logró realizar la referida diligencia de audiencia oral, la cual se llevó a cabo de manera virtual por medio de la plataforma *Meet* de Google, las partes vertieron los



siguientes alegatos: En cuanto a la parte apelante, Licenciado [REDACTED] de manera inicial alegó que como parte apelante esperan que el ente obligado haga entrega de la información solicitada, ya que en la solicitud de información como en las prevenciones realizadas por el oficial de información se subsanó dando parámetros claros y precisos para la localización de la información requerida, además consideró que se trata de información que puede ser proporcionada porque la Policía Nacional de la época era una de las ramas de las Fuerzas Armadas, por tanto, respondía al Ministerio de la Defensa Nacional el cual debe resguardar la información. Además, considera que al realizar la tramitación de la solicitud, el oficial no brindó mayor detalle de la búsqueda o pormenorización de las gestiones realizadas, en tal sentido el representante de la parte apelante solicitó que este Instituto tome en cuenta que la parte apelante se apegó de buena fe al requerimiento de tiempo adicional de búsqueda, asumiendo que existía buena fe del ente obligado de hacer una auténtica búsqueda; sin embargo, afirmó “no se obtuvo la información”.

En sintonía con lo expuesto por su representante, la señora [REDACTED] manifestó que es víctima de la desaparición de su familia por miembros de las Fuerzas Armadas mediante la Policía Nacional; que se encuentra realizando la búsqueda de la información para garantizar su derecho a la verdad, confiando en que actualmente se encuentra ante institucionalidad sólida, atinente a un verdadero Estado Constitucional de Derecho que realmente podrán responder estando ya en una era post conflicto.

Por su parte, la representación del ente obligado, inicialmente alegó la ratificación de lo actuado por el oficial de información del MDN; adicionalmente, el Licenciado [REDACTED] expresó que no se ha concluido la búsqueda de la información, indicando que a raíz de la información extra presentada por la apelante, que puede beneficiar la localización de la información es que se ha ampliado la búsqueda; solicitó la comprensión respecto al tiempo que ha demorado la búsqueda debido a los hechos fortuitos que atraviesa el país en general, no solamente en cuanto al tema climático sino también sanitario que ha visto afectado al MDN en la disminución de su recurso humano; manifestó también que la MDN sigue actuando de buena fe, realizando amplias labores de búsqueda de la información, afirmando que se hará entrega de la información que pudieren localizar y que se demostrará fehacientemente la ardua labor de búsqueda que dicha institución lleva a cabo.

En sus alegatos finales, la parte apelante alegó que solicita al Pleno que se emita resolución conforme a derecho, verificando que ha transcurrido los plazos procesales, mostrada su buena fe que se ordene la entrega de la información y quedará en evidencia al momento de cumplir la resolución del Honorable Pleno del Instituto la buena fe que ha manifestado la representación del Ministerio de la Defensa Nacional; en tal sentido, la parte apelante le toma la palabra a la expresión de buena fe del ente obligado, “pero lamentablemente ya no hay más momentos procesales”, por tanto solicita que el Pleno resuelva sobre el caso.

En cuanto al ente obligado, el representante del **MDN** manifestó en sus alegatos finales que lamentan no poder brindar toda la documentación en ese momento, pero que dicha institución tiene muy en serio brindar el acceso a los ciudadanos; por otra parte, solicita al Pleno de Comisionados y Comisionadas que emitan resolución y que en esta tome en cuenta que el plazo de la búsqueda se ha tornado complejo, atendiendo el anormal desarrollo de actividades que ha caracterizado al presente año en todas las instituciones públicas e inclusive a nivel global; manifestó también que solicita comprensión respecto al punto anterior, sin embargo, que dicha comprensión tampoco debe entenderse como una negativa a brindar la información a la apelante, sino que la búsqueda no se ha completado, sino que se está haciendo de forma seria y documentada.

Por otra parte, se tuvieron algunas preguntas de carácter aclaratorias por parte de algunos miembros del Pleno de Comisionados/das, se consultó al representante del ente obligado *¿Cuáles son las diligencias de búsqueda realizadas hasta el momento en la institución?* manifestando el apoderado que no podía entrar en detalle en ese preciso momento, sin embargo confirmaba labores de búsqueda en casi todos los departamentos administrativos de dicha institución; manifestó, además que las referidas diligencias de búsqueda constan en actas las cuales serán remidas oportunamente a la ciudadana apelante y representante del ente obligado aseguró que todas las diligencias están debidamente documentadas.

Otras de las preguntas aclaratorias fue en relación a ¿por qué no se ha hecho la entrega, por lo menos de manera parcial, de la información que hasta el momento pudieron haber localizado como muestra de la buena voluntad que han manifestado en reiteradas ocasiones respecto al actuar de la administración pública para con la peticionaria? Al respecto, el representante del ente obligado afirmó que se trata de “*jurisprudencia*” de dicha institución, es



decir, que en el proceder del ente obligado no acostumbran a hacer entregas parciales, esto debido a que el Instituto en ningún momento ordena este tipo de entregas de información, y en segundo lugar, como una muestra de respeto a la peticionaria, a quien no puede asegurarle que se localizará el cien por ciento de lo peticionado, pero si le aseguran hacerle entrega de toda la documentación e información que se llegase a localizar.

2. Análisis del caso:

Habiendo realizado la consideración y previo a iniciar el presente análisis del caso, este Instituto delimita el objeto de controversia a la inexistencia y, en su caso, a la obligación de producir, reconstruir y entregar toda la información solicitada por [REDACTED]

Asimismo, debe resaltarse que parte del objeto de la controversia del presente caso, se refiere expresamente a la información circundante o directamente relacionada con el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos, durante el conflicto armado en nuestro país, en particular sobre la desaparición forzada de las personas siguientes: [REDACTED]

[REDACTED] en consecuencia, el presente caso debe recibir el tratamiento jurídico correspondiente al acceso a información relativa a esta especial naturaleza.

En tal sentido, en la jurisprudencia constitucional se han retomado pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual de manera consistente, en distintas declaraciones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, ha señalado que constituye una afrenta a la dignidad humana y una violación grave y flagrante de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y detallados en otros Instrumentos Internacionales en la materia, así como una violación de las normas de Derecho Internacional, y que, como se proclama en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que aluden a que, ningún Estado cometerá, permitirá o tolerará las desapariciones forzadas —v. gr. resolución 59/200, aprobada el 20 de diciembre de 4 Sala de lo Constitucional, Sentencia de Inconstitucionalidad referencia 44-2013/145-2013 del 13 de julio de 2016. 2004—.

Aclarado lo anterior, es menester analizar los aspectos relativos al acceso a la información solicitada por la parte apelante, para tal fin el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Consideraciones respecto a la inexistencia de información y los mecanismos que se deben de realizar para para la búsqueda de la información; (II) Consideraciones respecto al derecho de acceso a la información pública (DAIP), el derecho a conocer la verdad y a las desapariciones forzadas; y, (III) Consideraciones respecto a la información solicitada, valoración de la prueba y la obligación de reconstruir información con respecto a las graves violaciones a derechos humanos.

I) El objeto de controversia del presente caso, conforme a los argumentos dados por el MDN, versa en que la información solicitada por el apelante es de carácter inexistente. En este sentido, debe considerarse que la declaratoria de inexistencia de información se enmarca dentro de las restricciones al derecho de acceso a la información, y en consecuencia al ente obligado le son aplicables las condiciones relativas a procurar el debido acceso de los particulares a lo solicitado y a soportar la carga de la prueba en cuanto a demostrar fehacientemente las limitaciones a su ejercicio.¹

En este sentido, la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información, recae en el órgano al cual la información fue solicitada, así como a los productores de la información o las instituciones encargadas de su resguardo, pues con ello se alcanza un mayor grado de seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, en la medida que al estar la misma en control del Estado, debe evitarse al máximo el actuar discrecional de este, al momento de establecer las restricciones²

En este mismo orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la LAIP, cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla, y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia. Esto implica, el deber de las instituciones sometidas a la LAIP, para documentar y demostrar la inexistencia de la

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de fondo y costas del caso Claude Reyes y otros contra Chile, del 19 de septiembre de 2006.

² Resolución definitiva del IAIP, de referencia NUE 72-A-2016 del 06 de junio de 2016.



información solicitada a partir de su propio Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA).

Al respecto, debe aclararse que la obligación de constituir un SIGDA proviene del mandato contenido en los art. 41 y 42 de la LAIP, la que delega a este Instituto la formulación de los lineamientos correspondientes a su desarrollo y aplicación en cada institución. En este orden de ideas, el art. 3 del Lineamiento 3 para la Identificación y Clasificación Documental, emitido por este Instituto, establece la obligación de crear un cuadro de clasificación documental que describa la producción documental de la institución descrita en tipos y series, de tal forma que con su análisis puedan identificarse, en términos generales, la clase documentos que la institución produce o resguarda. Por otro lado, el Art. 5 del Lineamiento 4 para la Ordenación y descripción documental, obliga a las Instituciones a mantener y actualizar inventarios detallados sobre su acervo documental.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con los lineamientos emitidos por este Instituto en materia archivística, cada institución debe contar con las herramientas necesarias para determinar fehacientemente la inexistencia de un documento por medio de sus instrumentos archivísticos y las acciones de búsqueda que realice en virtud de las solicitudes que se le presenten. Por otro lado, el propósito de la declaratoria de inexistencia es que el ente emita una resolución en la cual confirme en su caso, la inexistencia de la información solicitada, garantizando que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información, y se contrastaron con los instrumentos archivísticos correspondientes, y que tales acciones fueron adecuadas y suficientes para atender a la particularidad del caso en concreto; es decir, dar certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada.

En acotación a lo anterior, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad —es decir, se trata de una cuestión de hecho—, no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada³.

³ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

Por tanto, se estima que la inexistencia de la información en particular, es un hecho demostrable, a partir de la implementación de las medidas archivísticas mínimas requeridas por la normativa aplicable. Asimismo, este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) nunca se haya generado el documento respectivo; b) el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero, se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.⁴

Sin embargo, en todo caso debe constar en la declaratoria de inexistencia por parte del oficial de información la justificación correspondiente respecto a ello. De igual forma, este Instituto ya ha asentado criterios⁵ en los que se ha tomado como base los estándares emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá comprobar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate.

Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o

⁴ Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

⁵ Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.



atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en el caso que sea posible". No obstante lo anterior, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, no debe ser utilizada como un límite irrestricto al DAIP de los solicitantes de la información, pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

Ahora bien, hay que hacer la aclaración que el objeto de apelación del presente caso radica sobre la resolución del oficial de información el día 3 de octubre de 2019. Si bien es cierto ya existe un pronunciamiento previo con respecto a la información solicitada, en la que el oficial de información resolvió confirmar la inexistencia de la documentación de las pretensiones incoadas, el no contar con las diligencias de búsqueda correspondientes, puede significar una vulneración al contenido del derecho de acceso a la información pública de los/as ciudadanos/as.

Por otro lado, al analizar el expediente administrativo de este procedimiento, se puede advertir que los documentos que obran en su contenido, no permiten establecer con certeza que el MDN haya realizado una búsqueda apegada a criterios técnicos archivísticos, sobre la información solicitada por la parte apelante. En consecuencia, para que la parte apelante tenga una mayor certeza de las diligencias de búsqueda de la información, y en relación a las valoraciones de graves violaciones a derechos humanos en las que este Instituto se pronunciará más adelante en la presente resolución, es menester que se realice una nueva búsqueda de la información donde se documente todo lo realizado por el oficial de información en las unidades correspondientes y la respuesta brindada por estas, a manera de garantizar que se hicieron las gestiones necesarias para obtener la información.

Debe valorarse que el 23 de junio de 2020, se le concedió al ente obligado el plazo de cuarenta días para realizar una nueva búsqueda de información; sin embargo, a la fecha no se ha informado ni a la parte apelante ni a este Instituto el resultado de esas diligencias de búsqueda, siendo indispensable contar con la documentación que respalde y contraste que se haya verificado con los instrumentos archivísticos correspondientes, como inventarios de los depósitos documentales y actas de eliminación o expurgo documental, con el fin de demostrar, fuera de toda duda, si la información obra o no en poder del MDN.

II. Ahora bien, otro aspecto fundamental que nos ocupa en el presente caso, es que la información solicitada tiene que ver, en parte, durante el conflicto armado que se suscitó en el país en los años 80s y en los años previos a la misma, período histórico caracterizado por el cometimiento de graves violaciones a derechos humanos, en las que agentes del MDN tuvieron participación directa en el contexto del conflicto armado. En línea con lo anterior, tal como se hizo en el caso con número de referencia NUE 67-A-2013, NUE 71-A-2013 y NUE 252-A-2019, es menester hacer algunos comentarios sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y el derecho a conocer la Verdad, pues ambos se encuentran en una relación de complementariedad y reciprocidad.

Siguiendo la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este Instituto ha sostenido que el derecho de acceso a la información pública, tiene una indiscutible condición de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión —art. 6 de la Constitución (Cn.)— que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho consagrado en el art. 85 Cn., que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración.

De esa condición de derecho fundamental se derivan consecuencias tales como: a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y, d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora.

También este Instituto ha dicho que el contenido constitucionalmente garantizado por el DAIP no solo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y obligación de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino que la misma debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz, por lo que es un deber de aquéllos fundamentar la imposibilidad de su acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución. En cuanto al marco supra legal, el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a investigar y recibir información, en los



siguientes términos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Además, el DAIP está reconocido en instrumentos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos—CADH—(art. 13.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2) que conciben, respectivamente, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, y que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Si bien tales disposiciones aparentan referirse solo a la libertad de expresión debe aclararse que esta última comprende la prerrogativa de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, y por cualquier medio, siendo en la voz “recibir y difundir informaciones” donde se encuentra reconocido el derecho a ser informado y correlativamente, la obligación del Estado de brindar información. De esa manera, la libertad de información se entiende como un derecho derivado de la libertad de expresión.

Sin duda, una fuente importante de reconocimiento del DAIP como derecho fundamental, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual pronunció su primera sentencia el 19-IX-2006 (caso Claude Reyes y otros vs. Chile) en la que estableció una serie de criterios para todos los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En dicho precedente se destacó la importancia del DAIP para el ejercicio del control democrático de la gestión pública y la obligación que tienen los Estados de garantizarlo, a través de que sus actuaciones están regidas por los principios de publicidad y transparencia, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Posteriormente, la CIDH en el caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, del 24-XI-2010, sostuvo que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia; y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. Reafirma la idea de que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima publicidad, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.

De igual forma, debe destacarse que el DAIP guarda una estrecha relación con el derecho a conocer la verdad. En el ejercicio conjunto de estos derechos humanos cobra vital importancia, ante la investigación de probables casos de desaparición forzada de personas, constituyéndose como las herramientas idóneas para el esclarecimiento de los hechos, y el medio primordial que tienen los familiares de las víctimas para satisfacer su necesidad de conocer la Verdad sobre lo ocurrido, como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Narciso González Medina vs. República Dominicana “con fundamento en estos derechos es posible reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos, reparar a las víctimas y formar una opinión pública vigorosa que contribuya a la recuperación democrática y a la reconstrucción del Estado de Derecho”.

Ahora bien, en cuanto al derecho a conocer la verdad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el mismo encuentra sustento en los arts. 2 inc 1º y 6 inc. 1º de la Cn., señalando que la verdad solo es posible si se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción⁶.

Asimismo, debido a que la libertad de información pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de hechos con relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, para tomar decisiones libres, el derecho a conocer

⁶ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de amparo: 665-2010, del 5-II 2014.



la verdad implica el libre acceso a información objetiva sobre hechos que hayan vulnerado los derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon, y por lo tanto implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de igual forma, entiende que el derecho a la verdad como el derecho que asiste a las víctimas —directas e indirectas— de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario⁷ o al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como también a la sociedad en su conjunto⁸, a conocer lo verdaderamente ocurrido en tales situaciones.

Entendemos entonces, que el derecho a la verdad se configura como un derecho individual, a la vez que colectivo, cuya virtualidad aparece en los casos de reparación debida por parte de los Estados por graves violaciones de obligaciones internacionalmente asumidas⁹. En consecuencia, la satisfacción de este derecho conlleva necesariamente determinados deberes en cabeza de los Estados, en particular, el de investigar y esclarecer los hechos, el de individualizar a los responsables por los mismos y el de difundir públicamente dicha información¹⁰. Así las cosas, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a conocer la verdad son dos pilares fundamentales que deben estar presentes en nuestra sociedad, ya que obligan a la administración pública —en este caso al MDN— que en el caso de ocurrir graves violaciones a derechos humanos conserve la información relacionada y útil que debe de proporcionar cuando sea requerida.

⁷ CIDH, Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia, OEA/Ser.L/V/ II.120, Doc. 60, 13 diciembre 2004, párr. 32.

⁸ CIDH, Informe 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705 (Chile), en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1998, OEA/Ser. L/V/ II.102, Doc. 6 Rev., 16 de abril de 1999, párr. 94; Informe 1/99, Caso 10.480 (El Salvador), en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 3, 13 de abril de 2000, párr. 152; Informe 136/99, Caso 10.488 (El Salvador), en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, OEA/Ser. L/V/II.106, Doc. 3, 13 de abril de 2000, párr. 226; Informe 37/00, Caso 11.481 (El Salvador), en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, OEA/Ser. L/V/II.106, Doc. 3, 13 de abril de 2000, párr. 146.

⁹ CIDH, Informe 25/98, cit. supra nota 4, párr. 88; Informe 1/99, cit. supra nota 4, párr. 150; Informe 136/99, cit. supra nota 4, párr. 224; Informe 37/00, cit. supra nota 4, párr. 144. 14 Salzberg, Damián. Recuperado el 14 de febrero de 2020 en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22682.pdf>. Pág. 438. 15 V. Abramovich y C. Courtis. El acceso a la información como derecho. Anuario de Derecho a la Comunicación; Año I Vol. 1 (2000); Editorial Siglo XXI, Buenos Aires. 16 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, vigésimo cuarto período ordinario de sesiones/ junio de 1994.

¹⁰ Salzberg, Damián. Recuperado el 14 de febrero de 2020 en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22682.pdf>. Pág. 438.

En cuanto a las desapariciones forzadas, que también guarda relación con el presente caso, el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas establece este tipo de agresión como, "la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agente del Estado o por persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes"¹¹

En acotación al párrafo anterior, las desapariciones forzadas de personas se caracterizan por la arbitrariedad e irregularidad en la privación de libertad; también por la clandestinidad y secreto –aunque no generalizado– con el que operan los grupos militares o paramilitares, corporaciones policiales, e incluso organizaciones civiles, responsables de la privación ilegal de la libertad; la que va seguida de la desinformación o la negativa de proporcionar datos que permitan la localización del afectado por parte de los señalados como responsables o de quienes deberían brindar, a fin de mantener oculto su paradero y evitar que se lleve a los autores ante las autoridades encargadas de determinar su responsabilidad, por lo que se mantiene a los familiares de aquella en una total ignorancia sobre la suerte de quien ha sido sometido a restricción.

En la jurisprudencia constitucional se han retomado pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual de manera consistente, en distintas declaraciones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, ha señalado que constituye una afrenta a la dignidad humana y una violación grave y flagrante de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y detallados en otros instrumentos internacionales en la materia, así como una violación de las normas de derecho internacional, y que, como se proclama en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ningún Estado cometerá, permitirá o tolerará las desapariciones forzadas –v. gr. resolución 59/200, aprobada el 20 de diciembre de 2004–.¹²

¹¹ Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, vigésimo cuarto período ordinario de sesiones/ junio de 1994.

¹² Sentencia de proceso de Hábeas Corpus pronunciada por la Sala de lo Constitucional a las once horas con dieciocho minutos del día cinco de marzo de dos mil dieciocho. Ref: 119-2017.



En este orden de ideas, este Instituto ha sostenido que cuando se solicite información relativa a graves violaciones a derechos humanos, se encuentran vigentes dos conjuntos de obligaciones estatales, uno de ellos corresponde a la investigación de los hechos y el otro a la satisfacción de los requerimientos de información particulares

Por lo tanto, en las respuestas a las solicitudes de información que tengan que ver con estas violaciones a derechos humanos, no basta solo con afirmar que la información es de carácter inexistente, sino que se debe de ir más allá en la obtención de la información relacionada a la misma, esto debido a que el derecho a la verdad supone una reparación a las víctimas y sus familiares de tales hechos suscitados, debiendo de quedar documentado las diligencias realizadas en la obtención de esta información y, en su casos reconstruir la misma con la finalidad de salvaguardar estos derechos. No pudiendo asumir con pasividad el incumplimiento del propio Estado, en lo relativo a la investigación de tan graves hechos.

III. Otro aspecto fundamental a considerar para el análisis de mérito es determinar el alcance de la información solicitada y las consecuencias de la declaratoria de inexistencia emitida por el ente obligado, particularmente considerando la naturaleza de la información requerida. Este Instituto ya ha asentado el criterio que en los casos relativos a graves violaciones a derechos humanos y, de igual forma, a las obligaciones relativas a la búsqueda y entrega de la información.

De igual forma, ya han existido pronunciamientos con respecto a la tarea de reconstruir dicha información para así lograr la búsqueda de la verdad y esclarecer los hechos ocurridos partiendo de los deberes de investigación que recaen sobre el Estado en este tipo de casos, y de la obligación de reconstrucción en los casos en que la Administración actúe en omisión de un deber legal de generación o resguardo de la información¹³. En acotación a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sentado precedentes como Myrna Mack Chang vs. Guatemala, 25-XI-2003 y el caso mencionado anteriormente, de Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, a partir de los cuales toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad y por lo tanto, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. El

¹³ De manera ilustrativa se citan las resoluciones definitivas de los casos referencia NUE 67-A-2013, NUE 71-A-2013 y NUE 252-A-2019 emitidas por este Instituto

referido tribunal consideró que el derecho de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, deben conocer la Verdad, donde se enmarca en el derecho de acceso a la justicia; la obligación de investigar como una forma de reparación, ante la necesidad de remediar la violación del derecho a conocer la Verdad en el caso concreto; y que el derecho a conocer la verdad está relacionado con el acceso a la justicia y el derecho a buscar y recibir información. 17.

Para el presente caso, es menester considerar que de la información solicitada, ocurrió en el contexto de graves hechos ocurridos antes, durante y después la guerra civil, algunos de ellos investigados como graves violaciones a los derechos humanos y reconocidos como tales en el informe de la Comisión de la Verdad. De igual forma, hay que retomar nuevamente el caso de Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil, donde la CIDH considera que el DAIP no se satisface con la mera declaratoria de inexistencia de una información, sino se establece una serie de obligaciones estatales a favor de los solicitantes a fin de garantizar el pleno cumplimiento del derecho. 18.

Por lo que, como se ha mencionado en casos anteriores y que fueron citados previamente, el MDN tiene la obligación de realizar de buena fe todas las diligencias necesarias para ubicar físicamente la información solicitada, encargándose de documentar la realización de una búsqueda seria y eficaz, no solo en los archivos de las unidades militares, sino también en cualquier parte, ya sea en los recintos militares o lugares que estén en propiedad del ente obligado, donde pueda encontrar indicio alguno de la existencia de tal información. Ello es conforme con lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde se dispone que el Estado tiene la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas internacionales, constitucionales o legales. 19.

Al respecto, se tienen indicios que el MDN ha iniciado una búsqueda exhaustiva desde el 23 de junio de 2020, pero no se presentó la estrategia o planificación de cómo se realiza la misma, ni insumos sobre avances o resultados, inobservando el principio de prontitud, que reviste al DAIP. Estos puntos son importantes tomarlos en consideración, a efecto de determinar en primer lugar si existe o no la información bajo el resguardo del MDN, y en caso de no existir,



determinar el motivo de tal circunstancia; por ejemplo, si una información que debía custodiar fue destruida o ilegalmente sustraída, y la misma era necesaria para esclarecer violaciones de derechos humanos, el Estado debe adelantar, de buena fe, todos los esfuerzos a su alcance para recuperar o reconstruir dicha información.

Por lo que, no se puede determinar que en efecto la información solicitada no existe o si fue destruida de manera negligente sin los criterios archivísticos previamente señalados.

Dicho lo anterior, el conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, ya citado, determina que los Estados tienen el deber de preservar los archivos y otras pruebas relativas a graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo los archivos de: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan desempeñado una función importante con relación a las violaciones de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del Fiscal y el Poder Judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y, d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación.

Retomando la cita que se hizo por parte de la CIDH, este Instituto como principal garante del Derecho de Acceso a la información Pública, sostiene que cuando un ciudadano solicita información relacionado al ámbito de graves violaciones a derechos humanos, el ente al que se le solicita la información (en este caso el MDN), debe de garantizar por todos los medios posibles entrega de dicha información o la reconstrucción de la misma, ya que la ciudadana se encuentra ejerciendo directamente su derecho a la verdad, la justicia y el reparo de las personas que sufrieron este tipo de daños.

En tal sentido, en términos probatorios, de conformidad a lo establecido en el art. 106 de la LPA, en relación al art. 314 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe considerarse que no requieren ser probados los hechos admitidos o estipulados por las partes, en tal sentido en este procedimiento la inconformidad mostrada por la parte apelante ha sido en virtud de la declaratoria de inexistencia de la información objeto de controversia, situación que no ha sido negada por el ente obligado, contrario a eso solicitó el plazo de 40 días para la realización de nueva búsqueda de información, permitiendo tener por establecido, por una parte, que prima facie sí resolvió declarar

la inexistencia de todos los requerimientos de información realizados por la ciudadana **Gloria Guzmán Orellana**; y en segundo lugar, que hay intención de realizar diligencias de búsqueda por parte del MDN, de forma más amplia en todos los recintos donde pudiera encontrarse tal información, pero al no tener elementos que permitan a este instituto medir o cuantificar avances respecto a tal búsqueda es pertinente emitir la orden de búsqueda y entrega de información.

Lo anterior, tomando en cuenta que la información solicitada contiene información en el marco de graves violaciones a derechos humanos, es procedente revocar la resolución emitida por el oficial de información del MDN el día 3 de octubre de 2019 y ordenarle una nueva búsqueda de la información para garantizar los derechos mencionados anteriormente.

3. Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) Revocar la resolución emitida por el Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), el día 3 de octubre de 2019.

b) Ordenar al MDN que, por medio de su titular, dentro del plazo de **30 días hábiles** contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, realice las siguientes acciones: *i) realizar una nueva búsqueda de la información concerniente a "a) (...) documentos de nombramiento (orden general de nombramiento) y remoción (orden general de baja) de la máxima jefatura, alto mando, comandante de la fuerza armada, además solicitamos nombre completo y rango de la máxima jefatura de la fuerza armada en mayo de 1982; b) proporcione quien (nombre, apellido y rango) estaba destinado al mando de las operaciones de seguridad pública circunscritas al municipio de Ayutuxtepeque y Mejicanos por parte de la Fuerza Armada el 17 de mayo de 1982; c) Informe diario de situación (IDS) sobre las detenciones ocurridas a partir del 15 de mayo hasta septiembre de 1982 en el municipio de Ayutuxtepeque y Mejicanos, que llevó la fuerza armada; d) (...) manual de procedimientos ordinarios diarios sobre detenciones y turnos en 1982 que llevó la fuerza armada o el plan operativo normal vigente en 1982 relativo a la detención de personas; e) (...) copia del registro del libro de detenciones que llevó la fuerza*



armada, en el cuartel central en mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1982, identificando si existen registros de las personas siguientes: [REDACTED]

[REDACTED] f) (...) documentos de resumen de inteligencia nacional por la Fuerza Armada en San Salvador llevados en mayo de 1982 y el plan de seguridad interior o plan militar anual vigente a la fecha; y g) solicitamos informe periódico personal que remitió la Fuerza Armada entre el 17 y el 25 de mayo de 1982 en Ayutuxtepeque y Mejicanos.”; con las unidades administrativas correspondientes, incluyendo todos los archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en los hechos y en los lugares suscitados, durante los períodos de tiempo señalados; debiendo además, dejar constancia fehaciente de los procedimientos empleados para tal efecto y justificar debidamente los resultados obtenidos; ii) en el caso de no encontrarse la información antes mencionada, deberá ejecutar diligencias encaminadas a recuperar o reconstruir la información solicitada, las cuales incluyen: recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron —en todos los niveles— en las operaciones o los hechos alegados; y consultar registros históricos pertenecientes a otras instituciones estatales, privadas, nacionales e internacionales, que pudieran contener información relacionada con la pretensión de la parte apelante. Todas las diligencias efectuadas para ese proceso, deberán quedar debidamente documentadas en los instrumentos archivísticos correspondientes y en las declaratorias de inexistencia cuando procedan, los cuales deberán ser puestos a disposición de la apelante y de este Instituto; en el mismo plazo antes señalado. Así como la información objeto de controversia en el caso de encontrarla.

c) **Ordernar al MDN**, que por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior mencionado en el literal c), remita a este Instituto un informe de cumplimiento de las órdenes contenidas en el mismo, en el que haga constar la entrega de la información al apelante, mediante la documentación pertinente; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

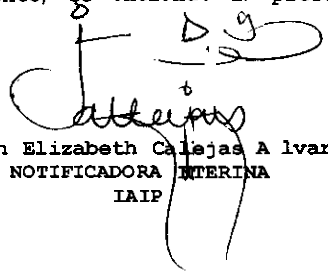
Notifíquese. -




PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

SD/GC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintiuno.


Josselin Elizabeth Callejas Alvarado
NOTIFICADORA INTERINA
IAIP



